



ACCIÓN DE TUTELA

68-001-40-88-016-2021-00107-00

Bucaramanga, diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

COMPETENCIA

Este Despacho es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el artículo 1 del Decreto 1382 del 2000, compilado en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, modificado por el Decreto 1983 de 2017.

ASUNTO A DECIDIR

Dentro del término legal, el Despacho entra a resolver la acción de tutela promovida por el ciudadano SANTIAGO SÁNCHEZ MANTILLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.682.166, actuando en representación de la empresa INFRAESTRUCTURA Y VIAS S.A.S, identificada con NIT 901260508-2, en contra de la ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN, para la protección de su derecho fundamental constitucional de petición y debido proceso presuntamente vulnerados.

HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES

El 3 de agosto de 2021, SANTIAGO SÁNCHEZ MANTILLA, actuando en representación de la empresa INFRAESTRUCTURA Y VIAS S.A.S, elevó petición ante la ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN, invocando se informara: i) si ya fue realizado el pago por concepto del acta final; ii) si no se ha realizado, cuáles son las causas que motivan a la entidad para retener el pago y cuándo es la nueva fecha prevista para el mismo; iii) En caso de que el pago se haya realizado de acuerdo al compromiso, solicitó copia del egreso y el número de la cuenta a la cual se transfirieron los dineros así como el titular de la misma.

Ante la ausencia de respuesta de fondo a su solicitud dentro de los 15 días siguientes a su radicación, procedió a interponer la presente acción de tutela, además, informa que, si bien tuvo conocimiento del pronunciamiento de la Alcaldía de Villagarzón, ello no se dio con la elaboración de una comunicación dirigida a su nombre y notificada desde las cuentas oficiales de la accionada.

PRETENSIONES

Invoca el accionante se proteja su derecho fundamental de petición y debido proceso, en consecuencia, se resuelva:

1. ORDENAR a ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN, proceda a emitir respuesta de fondo a lo peticionado.

ACTUACIÓN PROCESAL

Mediante auto del pasado seis (6) de agosto de los corrientes, el Despacho avocó el conocimiento de la presente acción de control constitucional, dentro del cual corrió el respectivo traslado a la accionada, para que en el término de un (1) día ejerciera su derecho de defensa y contradicción.

Así mismo, se dispuso vincular de oficio a la UNION TEMPORAL ALIANZA, GUSTAVO ADOLFO ACOSTA ORTEGA y LA SECRETARIA DE HACIENDA VILLA GARZÓN.



Respuesta de las entidades accionadas:

1. ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN, el 7 de septiembre de 2021, informó que a su Despacho no se allegó la petición de la que reclama respuesta, procediendo a emitir contestación a la solicitud dentro del pronunciamiento sobre el escrito de tutela, informando que: i) Hasta la fecha se ha pagado a la Unión Temporal Alianza, de la cual hace parte la empresa INFRAESTRUCTURA Y VÍAS S.A.S., la suma de NOVEVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS (\$968.232.057,23), por concepto de anticipo.; ii) Una vez el contratista Unión Temporal ALIANZA cumpla con las cantidades de obra contratadas y demás formalidades exigidas se procederá a liquidar y pagar el excedente del valor del contrato; iii) Adjuntó certificado de pago realizado por concepto de anticipo a la Unión Temporal.

2. GUSTAVO ADOLFO ACOSTA ORTEGA, señaló en email del 9 de septiembre de 2021, que el 9 de noviembre de 2020, la Unión Temporal Alianza recibió un pago por concepto de anticipo del 50% del valor inicial del contrato, sin que se hayan suscrito actas parciales y actualmente se encuentra en proceso de liquidación de contrato de obra para posterior trámite de pago final.

Dicha comunicación fue dirigida a este Despacho con copia al accionante. Así mismo, adjunto en email archivo suscrito por el Secretario de Planeación, en donde se pone en conocimiento del accionante la información adelantada.

En consecuencia, estima que, dado que el accionante no ha elevado solicitud de retiro de información, lo que es un requisito de procedibilidad a la acción de tutela, la misma deviene improcedente respecto de su entidad.

Por lo anterior, solicita se ordene su desvinculación dentro de la presente acción por falta de legitimación en la causa por pasiva.

3. La UNION TEMPORAL ALIANZA y LA SECRETARIA DE HACIENDA DE VILLAGARZÓN, vinculadas de oficio por el Despacho, no emitieron pronunciamiento alguno dentro del término concedido por el Despacho.

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA

Antes de realizar el estudio del caso planteado, considera este Despacho que debe verificarse el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contemplados en el artículo 86 de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991.

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA

El artículo 86 de la Constitución, establece que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales por sí misma o por quien actúe en su nombre, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos que señale la ley, siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Así entonces, dicha normativa *«contiene los elementos de procedencia de la acción de tutela, entre ellos, el relacionado con la legitimación en la causa, la cual se entiende como la potestad que tiene una persona para invocar sus pretensiones o controvertir aquellas que se han aducido en su contra. De esta manera, el primero de los eventos se conoce como legitimación en la causa por activa y el segundo como legitimación en la causa por pasiva»*¹.

¹ Corte Constitucional, Sentencia T-477 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Calle 34 No. 11 – 22 Oficina 114 - Bucaramanga, Santander.
j16pmpalcbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co.





LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA

En la presente causa, se advierte que, quien acude a la acción de tutela, es precisamente la persona que se considera directamente afectada por la conducta esgrimida por la parte demandada, por lo tanto, al tenor de lo explicado en el título anterior, no existe duda acerca del cumplimiento de este requisito para ejercer la protección de sus derechos fundamentales, quien acude en representación de la persona jurídica que conformó la Unión Temporal que suscribió el contrato de obra con el ente municipal accionado.

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

La legitimidad en la causa por pasiva es la condición del sujeto contra quien se dirige la acción, de ser el llamado a responder por la presunta vulneración del derecho amenazado.

En este caso, se advierte que la acción de tutela va dirigida contra una entidad de carácter privado, eventos en los que es procedente la intervención del Juez Constitucional en aquellas situaciones en que el accionante se halla en una *relación de sujeción* frente a las actuaciones y omisiones de la entidad accionada, existiendo un desequilibrio de la accionante frente a la demandada.

Ahora bien, en torno a las demás entidades vinculadas por el Despacho, se tiene que no existe legitimación en la causa por pasiva, dado que ante ellas no se radicó el derecho de petición del que se reclama respuesta y el accionante ejerció acción de tutela en forma independiente contra cada uno de los destinatarios de su petición.

INMEDIATEZ

Entendiendo que este requisito se refiere a que la interposición de la acción de tutela se dé dentro de un término razonable, contado a partir del momento de ocurrencia del hecho alegado como transgresor de los derechos fundamentales, para este Despacho se encuentra satisfecha esta exigencia, toda vez que, los motivos que dan lugar a las pretensiones de la acción datan del tres (03) de agosto de dos mil veintiuno (2021), fecha en que la petición fue radicada ante la Alcaldía de Villagarzón, vía correo electrónico institucional, por lo que considera este Estrado que ha transcurrido un tiempo prematuro entre la radicación de la solicitud y la interposición de la acción de tutela.

Lo anterior, atendiendo que posterior a la radicación de una petición, la parte pasiva de la acción cuenta con treinta (30) días hábiles para dar respuesta a la pretensión de conformidad con el numeral 1° del artículo 14 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, modificado por el Decreto 491 de 2020, término que para el momento de elevar la solicitud de amparo, aún no había transcurrido, empero, dado que lo exigido por este presupuesto de procedibilidad es que no exista una demora injustificada entre la ocurrencia del hecho y el accionar de los mecanismos constitucionales, se tendrá como satisfecho.

SUBSIDIARIEDAD

Conforme al inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Política y 6° del Decreto 2591 de 1991, el requisito de subsidiariedad hace referencia a que la acción de tutela se constituye como un mecanismo de protección de carácter residual y subsidiario; es decir, que únicamente será procedente cuando no exista otro medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; o cuando existiendo, ese medio carezca de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada y efectiva los derechos fundamentales en cada caso concreto.

Es preciso establecer que como quiera que la pretensión va dirigida a recibir una respuesta no existe otro mecanismo que se pueda adelantar.

Calle 34 No. 11 – 22 Oficina 114 - Bucaramanga, Santander.

j16mpalcbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co.





PROBLEMA JURÍDICO

En esta ocasión, corresponde al Juez de tutela establecer si (i) ¿La ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN, vulneró el derecho fundamental de petición de SANTIAGO SÁNCHEZ MANTILLA, que se deriva del artículo 23 de la Constitución Política, al no haber otorgado respuesta a la petición radicada el 3 de agosto de 2021? (ii) ¿Con las respuestas emitidas el 7 y 9 de septiembre de 2021, se dio respuesta de fondo al derecho fundamental de petición de SANTIAGO SÁNCHEZ MANTILLA, que se deriva del artículo 23 de la Constitución Política? (iii) ¿Existió afectación del derecho fundamental al debido proceso de SANTIAGO SÁNCHEZ MANTILLA, que se deriva del artículo 15 de la Constitución Política? (iv) ¿De la eventual vulneración del derecho de petición surge la violación o amenaza de otro derecho fundamental?

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

GENERALIDADES DE LA ACCIÓN DE TUTELA

La acción de tutela se encuentra contemplada en el artículo 86 de la Constitución Política de 1.991, como el medio más expedito y eficaz para lograr que cesen o se detengan aquellas acciones u omisiones que vulneran o amenazan un derecho fundamental, no obstante, la misma se presenta como un instrumento de naturaleza subsidiaria y residual, es decir, sólo procede en ausencia de otros mecanismos adecuados de defensa, con la finalidad de otorgar protección inmediata a los derechos constitucionales fundamentales, cuando sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de la autoridad pública o de los particulares.

Esto es, está prevista como un mecanismo procesal, complementario y específico que tiene por objeto la protección concreta de los derechos constitucionales fundamentales en una determinada situación jurídica, cuando estos sean violados o se presente amenaza de su violación.

El ejercicio de la acción está condicionado a que la parte demuestre la existencia de una amenaza concreta y específica de violación de los derechos fundamentales cuya autoría debe ser atribuida a cualquier autoridad pública y en casos definidos por la ley a sujetos particulares.

La tutela es un instrumento de carácter directo porque siempre presupone una actuación preferente y sumaria a la que el afectado puede acudir solo en ausencia de cualquier otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN

El derecho fundamental de petición se encuentra reconocido en el artículo 23 de la Constitución Política, en el cual se dispone que toda persona tiene derecho a «presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución», constituyendo su núcleo esencial el suministro de una respuesta oportuna y de fondo a la solicitud planteada, abordado por la Corte Constitucional, en los siguientes términos:

«a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.



b) *El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.*

c) *La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.*

d) *Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.*

e) *Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine. (...)*

g) *En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.*

h) *La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.*

i) *El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994»².*

Ahora bien, según ha señalado la Corte Constitucional para considerar garantizado el derecho fundamental de petición ha de recibirse una respuesta que cumpla con los criterios de suficiencia, efectividad y congruencias, indicando en este sentido que:

«Los presupuestos de suficiencia, efectividad y congruencia también han sido empleados por la Corte para entender satisfecho un derecho de petición. Una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la solicitud y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la contestación sea negativa a las pretensiones del peticionario; es efectiva si soluciona el caso que se plantea (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); y es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse sobre lo planteado y no sobre un tema semejante, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional»³.

Ahora bien, respecto a los términos para resolver este tipo de solicitudes, la ley 1755 ha establecido:

² Corte Constitucional, Sentencia T - 831A de 2013. MP Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.

³ Corte Constitucional, Sentencia T - 172 de 2013. MP Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.



Artículo 14. Ley 1755 de 2015 Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

Sin embargo, el **Decreto 491 de 2020** «Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica», en el artículo 5 señala:

"Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

- (i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.
- (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales.



Decreto cuya constitucionalidad, fue analizada por la Corte Constitucional que en sentencia C-242 de 2020 en la parte resolutive numeral tercero declaro:

"la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 5° del Decreto 491 de 2020, bajo el entendido de que la ampliación de términos que contempla para solucionar las peticiones es extensible a los privados que deben atender solicitudes."

CASO CONCRETO

En cuanto al caso bajo estudio, se tiene que SANTIAGO SÁNCHEZ MANTILLA, en su calidad de representante legal de la empresa Infraestructura y Vías S.A.S., presentó petición vía correo electrónico el día 3 de agosto de 2021 ante la ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN, solicitando información en torno al pago de actas parciales por la ejecución del contrato de obra suscrito con ese ente municipal a través de la Unión Temporal Alianza.

La finalidad de su petición estaba encaminada a que se informara: i) si ya fue realizado el pago por concepto del acta final; ii) si no se ha realizado, cuáles son las causas que motivan a la entidad para retener el pago y cuándo es la nueva fecha prevista para el mismo; iii) En caso de que el pago se haya realizado de acuerdo al compromiso, solicitó copia del egreso, el número de la cuenta a la cual se transfirieron los dineros así como el titular de la misma.

Al interior del trámite constitucional, la accionada ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN, a través del señor Alcalde, informó que a su Despacho no se allegó la petición de la que reclama respuesta, procediendo a emitir contestación a la solicitud dentro del pronunciamiento sobre el escrito de tutela, informando que: i) Hasta la fecha se ha pagado a la Unión Temporal Alianza, de la cual hace parte la empresa INFRAESTRUCTURA Y VÍAS S.A.S., la suma de NOVEVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS (\$968.232.057,23), por concepto de anticipo.; ii) Una vez el contratista Unión Temporal ALIANZA cumpla con las cantidades de obra contratadas y demás formalidades exigidas se procederá a liquidar y pagar el excedente del valor del contrato; iii) Adjuntó certificado de pago realizado por concepto de anticipo a la Unión Temporal.

La respuesta a la acción de tutela se efectuó dando solución a cada cuestionamiento formulado por el peticionario y se remitió con destino al Despacho y a todos los correos contemplados por el actor como válidos para su notificación.

Aunado a lo anterior, en respuesta proferida por el vinculado Gustavo Acosta, se aportó copia del oficio suscrito por el Secretario de Planeación del municipio accionado, habiendo emitido respuesta de fondo al peticionario el pasado 7 y 9 de septiembre de 2021, absolviendo cada interrogante formulado, indicándole cuáles fueron los pagos cancelados por concepto de anticipo a la Unión Temporal.

Es así que este Despacho no encuentra argumentos para decir que existió un desconocimiento o un posible riesgo del derecho de debido proceso de la accionante.

Ahora, en torno al derecho de petición, del que se reclamó protección por cuanto se señaló que a pesar de haber transcurrido el término de 15 días, no se emitió respuesta de fondo, el Despacho encuentra que la respuesta emitida por la accionada cumplió con todos los parámetros establecidos para garantizar el respeto por esa garantía fundamental.

En el caso concreto, es claro que la entidad accionada cumplió con el presupuesto de la temporalidad, pues la accionante allegó soporte del envío de la petición con fecha 3 de agosto de 2021, y tal como se pudo corroborar, recibió respuesta los días 7 y 9 de septiembre de 2021, en las que se dio cabal solución a los 3 cuestionamientos formulados, por lo que claro resulta que la respuesta se encuentra proferida dentro del término establecido legalmente, pues ante el Decreto que amplió los plazos para resolver de fondo Calle 34 No. 11 – 22 Oficina 114 - Bucaramanga, Santander.

j16mpalcbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co





el derecho de petición, se tiene que la accionada contaba con el término de 30 días para emitir el documento solicitado, el que se vencía el 15 de septiembre de 2021.

Ahora bien, aun cuando los términos para emitir respuesta de fondo fueren los genéricos, lo cierto es que se trataría de un hecho superado pues en la actualidad el accionante ya conoce la respuesta.

En consecuencia, no habrá lugar al amparo constitucional deprecado, menos aún si se tiene en cuenta lo dispuesto por el Gobierno Nacional respecto de la ampliación de términos para atender las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, máxime cuando en la actualidad la presunta afrenta ya fue objeto de contestación, misma que se entiende clara, concreta y de fondo frente a lo pretendido y para el momento de presentación de la acción de tutela, aún no había vencido el término para resolver de fondo la solicitud, por lo tanto, no había aún vulneración del derecho de petición. Por lo tanto, la acción de tutela se negará.

Así pues, de la lectura de los hechos descritos en la petición o de las pruebas del expediente, no se puede inferir una posible afectación de cualquier otro derecho fundamental, por lo que en el presente evento se negará la protección de los derechos fundamentales de petición, debido proceso y habeas data.

Con fundamento en las razones fácticas y probatorias, el **JUZGADO DIECISEIS (16) PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE BUCARAMANGA (S)**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. – NEGAR LA ACCIÓN DE TUTELA, invocada por la ciudadana SANTIAGO SÁNCHEZ MANTILLA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.098.682.166, actuando en representación de la empresa INFRAESTRUCTURA Y VIAS S.A.S, identificada con NIT 901260508-2, en contra de ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO.- ORDENAR la desvinculación de la UNION TEMPORAL ALIANZA, GUSTAVO ADOLFO ACOSTA ORTEGA y LA SECRETARIA DE HACIENDA VILLA GARZÓN.

TERCERO.- COMUNICAR a las partes que contra este fallo procede la impugnación dentro del término de tres (03) días contados a partir de la notificación de la sentencia. De no impugnarse, envíese al día siguiente de su firmeza, ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO.- NOTIFICAR por el medio más idóneo, a las partes el contenido del fallo librando para ello las comunicaciones de ley. Una vez regrese el expediente de la Honorable Corte Constitucional, se ordena el archivo definitivo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura**

**Juzgados de Bucaramanga, pertenecientes al Sistema Acusatorio Penal
Juzgado Dieciséis (16) Penal Municipal Con Funciones De Control De Garantías**

Firmado Por:

**Angela Johanna Castellanos Barajas
Juez
Penal 016 Control De Garantías
Juzgado Municipal
Santander - Bucaramanga**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **842f00112ff6daf3aa64d747659c14510a6167c1e1a85d8295b01c7cd8fe9322**
Documento generado en 17/09/2021 10:40:27 a. m.

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**